

Informe sobre Libertad Religiosa Internacional 2019 Bolivia

Resumen Ejecutivo

La constitución estipula que el estado es independiente de la religión y establece “la libertad de pensamiento, espiritualidad, religión y culto, expresada individual o colectivamente, en público y en privado”. La constitución y otras leyes otorgan a las instituciones educativas el derecho a enseñar religión, incluyendo clases de creencias espirituales indígenas. El presidente Evo Morales renunció el 10 de noviembre, luego de protestas masivas contra las elecciones del 20 de octubre que fueron consideradas como fraudulentas, asumiendo el poder la presidenta de transición Jeanine Añez el 12 de noviembre, hasta las nuevas elecciones, que se espera se realicen en mayo de 2020. Según algunos observadores, tanto Morales como Añez utilizaron simbolismo religioso y espiritual que excluía otras creencias. En abril, el presidente Morales firmó la Ley de Libertad Religiosa, Organizaciones Religiosas y de Creencias Espirituales, que establece una clara distinción entre las organizaciones no gubernamentales (ONG) y las organizaciones religiosas. Partes de la ley se implementaron a finales de año. Los representantes de la comunidad protestante evangélica informaron nuevamente que varias comunidades religiosas más pequeñas con “iglesias en casas” prefirieron no registrar a sus organizaciones porque no querían proporcionar al gobierno acceso a información interna privada.

No hubo informes de acciones sociales significativas que afectaran la libertad religiosa.

El acceso de la Embajada de Estados Unidos a los funcionarios de gobierno bajo la administración de Morales fue limitado a pesar de las solicitudes de la Embajada para sostener reuniones. El gobierno de transición mostró interés en interactuar con el gobierno de Estados Unidos aunque no hubo conversaciones sobre la libertad religiosa con funcionarios de la embajada en las pocas semanas que el gobierno de transición estuvo en el cargo antes de fin de año. El personal de la embajada se reunió regularmente con líderes religiosos para subrayar la importancia de la libertad religiosa. El Encargado de Negocios organizó una reunión interreligiosa con líderes religiosos en octubre, incluidos representantes de grupos protestantes y judíos, y de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días (Iglesia de Jesucristo), para entablar un diálogo interreligioso y conversar sobre el nuevo proyecto de ley de libertad religiosa. Funcionarios de la embajada se reunieron en otras ocasiones con representantes de grupos musulmanes, protestantes evangélicos y católicos romanos para discutir la nueva legislación sobre libertad religiosa y otros temas relacionados con la libertad religiosa.

Sección I. Demografía Religiosa

El gobierno de Estados Unidos estima la población total en 11.5 millones (estimación de mediados del año 2019). Según las cifras del gobierno de Estados Unidos el 77 por ciento de la población se identifica como católica y el 16 por ciento como protestante, incluidos grupos protestantes evangélicos y pentecostales. Según el líder de la Iglesia de Jesucristo en La Paz, aproximadamente 300.000 seguidores residen en el país; el sitio web central de la Iglesia de Jesucristo estima más de 200.000 seguidores. Aproximadamente el 5 por ciento de la población se identifica con grupos religiosos más pequeños y el 5 por ciento se autoidentifica como no creyente. Hay aproximadamente 1.500 musulmanes y 450 judíos, según los líderes de las respectivas religiones y los informes de prensa. Muchas comunidades indígenas, concentradas en áreas rurales, practican una mezcla de tradiciones espirituales católicas e indígenas.

Sección II. Estado del Respeto del Gobierno a la Libertad Religiosa

MARCO LEGAL

Según la constitución, el estado respeta y establece la “libertad de pensamiento, espiritualidad, religión y culto”, expresada individual o colectivamente, en público y en privado. La constitución estipula que el estado es independiente de toda religión.

La constitución prohíbe la discriminación religiosa, incluyendo el acceso a instituciones educativas, servicios de salud y empleo, y protege el derecho de acceso a actividades públicas deportivas y recreativas independientemente de la religión.

La Ley de Libertad Religiosa, Organizaciones Religiosas y de Creencias Espirituales, firmada por el entonces presidente Morales en abril y parcialmente implementada para fin de año, crea una clara distinción entre las ONG y las organizaciones religiosas. La ley sigue exigiendo que todas las organizaciones religiosas o espirituales informen al gobierno de todas las actividades financieras, legales, sociales y religiosas. La ley regula las finanzas y las prácticas laborales de las organizaciones religiosas o espirituales al exigir que usen los fondos exclusivamente para lograr los objetivos de la organización, prohibiendo la distribución de dinero entre los miembros, sometiendo a todos los empleados a las leyes laborales nacionales, exigiendo que las organizaciones se registren en el Ministerio de Relaciones Exteriores, y obligándolas a pagar impuestos. Hasta que se publiquen los reglamentos completos, las leyes vigentes y reglamentos para el registro permanecerán vigentes.

La ley existente requiere que las organizaciones religiosas o espirituales se registren en el Ministerio de Relaciones Exteriores e informen al gobierno sobre todas las actividades financieras, legales, sociales y religiosas. Regula las finanzas y las

prácticas laborales de las organizaciones religiosas o espirituales al exigirles que usen fondos exclusivamente para lograr los objetivos de la organización, prohibiendo la distribución de dinero entre los miembros, sometiendo a todos los empleados a las leyes laborales nacionales y obligándolos a pagar impuestos. De conformidad con un concordato con la Santa Sede, la Iglesia Católica está exenta de registro.

Según la Unidad de Cultos y Organizaciones No Gubernamentales del Ministerio de Relaciones Exteriores, las organizaciones religiosas deben cumplir 14 requisitos para registrar su organización ante el gobierno. Las organizaciones deben presentar sus documentos legales notariados, incluidos los estatutos, reglamentos internos y procedimientos; documentos del contrato de alquiler, facturas de servicios públicos para el lugar o lugares de culto y un mapa con su ubicación; información detallada sobre los miembros del directorio y de los representantes legales, incluidas verificaciones de antecedentes penales; un certificado de INTERPOL para extranjeros; y prueba de solvencia fiscal. También deben proporcionar el organigrama, con nombres, direcciones, números de cédulas de identidad y fotografías; una lista completa de miembros e información de identificación; detalles sobre actividades y servicios proporcionados por la organización, incluida la ubicación de los servicios; e información sobre sus fuentes de financiación, nacionales y/o extranjeras.

Los requisitos para la clasificación como organización espiritual u organización religiosa varían ligeramente, pero el gobierno requiere esencialmente el mismo tipo de información de las entidades espirituales como de las religiosas. La constitución define una organización espiritual como un grupo de personas naturales, nacionales y/o extranjeras que se organizan para llevar a cabo prácticas que desarrollan su espiritualidad de acuerdo con su cosmovisión ancestral. La mayoría de las organizaciones espirituales son indígenas en sus orígenes. La constitución define una organización religiosa como un grupo de personas naturales, nacionales y/o extranjeras que se organizan con el propósito de llevar a cabo prácticas de adoración y/o creencias alrededor de un Ser Supremo para desarrollar su espiritualidad y religiosidad, y cuyo propósito no persigue ganancias.

El gobierno puede revocar la licencia de funcionamiento de una organización espiritual o religiosa si la organización no presenta un informe anual de actividades durante más de dos años consecutivos; no cumple con sus objetivos declarados; realiza actividades diferentes a las establecidas en su estatuto; o realiza actividades contrarias a la constitución, las leyes, la moral o las “buenas costumbres” del país. Una organización religiosa o espiritual también puede perder su licencia de funcionamiento si no cumple con la fecha límite para renovar la licencia.

Un reglamento de 2017 requiere que los grupos religiosos y espirituales vuelvan a registrar sus licencias de funcionamiento para garantizar que todos los documentos incluyan el nombre oficial del país como “Estado Plurinacional”. Antes de este nuevo requisito, las organizaciones podían tener una versión anterior de las licencias que incluía el nombre del estado como “República de Bolivia”. El nuevo registro también requiere que cualquier modificación a los estatutos de las organizaciones cumplan con todas las nuevas leyes nacionales. Las organizaciones debían cumplir con estos nuevos requisitos de registro para fines de 2019.

Las tarifas para obtener una licencia de funcionamiento difieren entre “Organizaciones religiosas” y “Organizaciones espirituales”, con costos de 6.780 bolivianos (\$990) y 4.068 bolivianos (\$600), respectivamente.

El gobierno se reserva el derecho de revocar el permiso de funcionamiento de una organización por incumplimiento de los requisitos de registro. El gobierno no puede negar reconocimiento legal a ninguna organización con base en sus artículos de fe.

La constitución y otras leyes brindan a las instituciones educativas la opción de impartir clases de religión, incluidas las clases de creencias espirituales indígenas, con el objetivo declarado de fomentar el respeto mutuo entre las comunidades religiosas. Si bien las clases de religión son opcionales, las escuelas deben enseñar ética con materiales curriculares que promuevan la tolerancia religiosa. El gobierno no restringe la enseñanza religiosa en escuelas públicas o privadas, y no impide a un estudiante asistir a escuelas privadas afiliadas con alguna religión. La ley también exige que todas las escuelas acepten estudiantes independientemente de su afiliación religiosa.

El país es parte del Pacto Internacional de Derechos Políticos y Civiles.

PRÁCTICAS GUBERNAMENTALES

Tras la renuncia del ex presidente Morales en noviembre, luego de protestas masivas contra las elecciones del 20 de octubre que fueron consideradas fraudulentas y de la posesión de la presidente de transición Añez, los medios informaron que algunos observadores criticaron a Añez por prestar juramento sobre una gran Biblia y usar imágenes católicas, en contraste con el uso de ceremonias indígenas por parte de Morales. Medios de comunicación informaron que durante la promulgación de la Ley de Libertad Religiosa, Organizaciones Religiosas y Creencias Espirituales, el presidente Morales “atacó” a la Iglesia Católica y dijo: “Me informan que un obispo de la ciudad de Oruro, celebrando la misa, dijo que en Palacio (de gobierno) está Satanás. No estoy resentido, perdonamos. (Me) pregunto: ¿quién es ese satanás? ¿El Evo? ¿O los ritos?”

Según líderes de las comunidades religiosas, líderes de la Iglesia de Jesucristo y de los protestantes evangélicos participaron en la redacción de la ley de libertad religiosa. Los medios informaron que algunas iglesias protestantes no evangélicas consideraban a la nueva ley como una interferencia del estado en el derecho fundamental a la libertad religiosa y como una supervisión de sus recursos económicos. A finales de año, el gobierno no había emitido reglamentos específicos para todos los aspectos de la nueva ley que detallarían cómo el gobierno tenía la intención de implementarla.

Miembros de la comunidad protestante evangélica nuevamente dijeron que varias comunidades religiosas más pequeñas habían formado congregaciones que celebraban servicios en lugares de culto no oficiales y realizaban otras actividades sin registrarse. Estas comunidades continuaron negándose a registrar sus organizaciones porque, según las fuentes, prefirieron no proporcionar al gobierno acceso a información interna. Las fuentes declararon que estos grupos no registrados todavía no podían ser propietarios de inmuebles ni tener cuentas bancarias a nombre de su organización; en cambio, el dinero de un grupo generalmente se mantenía en una cuenta bancaria controlada por la familia del líder. Según las fuentes, sin embargo, la administración de Morales no interfirió con estas organizaciones a pesar de su negativa a cumplir la ley.

Según la Unidad de Cultos y Organizaciones No Gubernamentales del Ministerio de Relaciones Exteriores, había 438 grupos religiosos registrados, un aumento sobre los 436 en 2018, después de que cuatro grupos retiraran sus registros respectivos a fines de 2018. Según los líderes religiosos, casi todas las organizaciones religiosas o espirituales conocidas que deseaban registrarse con el gobierno había cumplido con los requisitos. Los grupos religiosos declararon que el proceso de registro generalmente tomó de cuatro a seis meses en completarse.

Según algunos grupos protestantes no evangélicos, los evangélicos recibieron acceso preferencial al gobierno de Morales, que incluyó reuniones y llamadas telefónicas con anteriores líderes gubernamentales, porque fueron la principal organización religiosa representada durante la redacción de la nueva ley de religión.

Según informes de los medios de comunicación y de líderes religiosos, el entonces presidente Morales y otros líderes gubernamentales afiliados al Movimiento al Socialismo continuaron criticando a los líderes católicos que comentaban públicamente sobre cuestiones políticas. Representantes católicos dijeron que las tensiones públicas de larga data entre la comunidad católica y el gobierno de Morales continuaron hasta el final de la administración.

Según los medios de comunicación, el entonces presidente Morales también criticó a la Iglesia Católica por sus acciones durante la Inquisición y por lo que dijo fue su

papel en subyugar a los bolivianos durante la época colonial. Después de las elecciones presidenciales del 20 de octubre, el entonces ministro de la presidencia, Juan Ramón Quintana, declaró que “actores externos”, incluida la Iglesia Católica, estaban alineados con la oposición para sembrar temores de fraude. Quintana dijo en una entrevista con los medios, “El fraude es una coartada que fue instalada hace bastante tiempo en los medios de comunicación, en las redes sociales, a través de los opinadores contratados, organizaciones no gubernamentales con financiamiento extranjero, la Iglesia Católica alineada con la derecha”.

Según los medios, Luis Fernando Camacho, entonces presidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz y uno de los principales críticos del entonces presidente Morales, lanzó una campaña pidiendo la renuncia de Morales y afirmando que “la Biblia volverá al palacio de gobierno”. El 10 de noviembre, Camacho ingresó al antiguo Palacio de Gobierno con una Biblia y una carta de renuncia para que Morales la firmara; Morales no estaba en el palacio en ese momento, pero renunció más tarde ese día.

El 24 de mayo, el entonces presidente Morales firmó un acuerdo con la Iglesia Metodista para establecer una mejor comunicación con el gobierno y aumentar la cooperación en programas de justicia social.

El 28 de noviembre, la ministra de Relaciones Exteriores, Karen Longaric, anunció en una conferencia de prensa que el gobierno restablecería relaciones diplomáticas con Israel. El ex presidente Morales rompió lazos con Israel en 2009 por el conflicto en Gaza.

Sección III. Estado del Respeto Social a la Libertad Religiosa

No hubo informes de acciones sociales significativas que afectaran la libertad religiosa.

Sección IV. Política y Acción del Gobierno de Estados Unidos

El acceso del gobierno de Estados Unidos a los funcionarios del gobierno de Morales en la administración anterior fue limitado a pesar de las solicitudes de reuniones de la embajada. El gobierno de transición mostró interés en interactuar con el gobierno de Estados Unidos aunque no hubo conversaciones sobre la libertad religiosa con los funcionarios de la embajada en las pocas semanas en que el gobierno de transición estuvo en el cargo hasta fin de año.

Los representantes de la embajada habitualmente interactuaron con líderes religiosos para subrayar la importancia de la tolerancia y la libertad religiosa. En octubre, el Encargado de Negocios organizó reuniones interreligiosas con líderes religiosos de

las comunidades protestantes evangélicas, de la Iglesia de Jesucristo y judías para conversar sobre temas de libertad religiosa, como la nueva ley de libertad religiosa, y para alentar a los líderes religiosos a entablar un diálogo interreligioso. En otras ocasiones, funcionarios de la embajada interactuaron con líderes de grupos protestantes evangélicos, católicos y musulmanes.